

Roj: SAP IB 1669/2010  
Id Cendoj: 07040370042010100400  
Órgano: Audiencia Provincial  
Sede: Palma de Mallorca  
Sección: 4  
Nº de Recurso: 76/2010  
Nº de Resolución: 315/2010  
Procedimiento: Recurso de apelación  
Ponente: MIGUEL ALVARO ARTOLA FERNANDEZ  
Tipo de Resolución: Sentencia

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

PALMA DE MALLORCA

**SENTENCIA: 00315/2010**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BALEARES

APELACIÓN CIVIL; SECCION 4ª

Rollo nº 76/10

Autos nº 1364/08

Ilmos. Sres.

Presidente Acctal.

Dª María Pilar Fernández Alonso.

Magistrados:

Dº Miguel Álvaro Artola Fernández.

Dª Juana María Gelabert Ferragut.

SENTENCIA nº 315/2010

En Palma de Mallorca, a siete de septiembre de dos mil diez.

VISTOS en fase de apelación por los Ilmos. Sres. referidos los autos de juicio ordinario sobre rendición de cuentas de administración, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Palma, estando el número de autos y actual rollo de Sala consignados arriba, actuando como parte demandante-apelada Dª Camino , y en su representación el/la Procurador/a de los Tribunales Dº/a Juan María Cerdó Frías, y defendida por el/la Letrado/a Dº/a Juan José López Ruzafa, y como parte demandada-apelante Dº Florencio , y en su representación el/la Procurador/a de los Tribunales Dº/a Sara Truyols Álvarez-Novoa, y defendida por el/la Letrado/a Dº/a Ricardo González Zayas; ha sido dictada en esta segunda instancia la presente resolución judicial.

Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Miguel Álvaro Artola Fernández.

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Palma en fecha 30 de septiembre de 2009 en los autos de juicio ordinario en ejercicio de acción de rendición de cuentas de administración, seguidos con el número 1364/08, de los que trae causa el presente rollo de apelación, exponía en su Fallo lo que literalmente se transcribirá:

"Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por el Procurador Juan María Cerdó, obrando en nombre y representación de Dña. Camino , contra D. Florencio , debo DECLARAR y DECLARO que el demandado viene obligado a dar y rendir cuentas de la administración de los bienes de la demandante, CONDENÁNDOLE a que, en un plazo de un mes, proceda a dicha rendición, así como al pago de las costas de este proceso."

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación en plazo y forma, el cual correspondió a esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Baleares. Dicho recurso fue instado por la representación procesal de la parte señalada en el encabezamiento como apelante, oponiéndose la contraparte; todo ello en base a las alegaciones que se resumirán en el Fundamento jurídico primero de la presente resolución.

ÚLTIMO.- No siendo propuesta prueba en esta fase de apelación por ninguna de las partes del litigio, se siguió el recurso con arreglo a los trámites previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, quedando el rollo de apelación concluso para dictar sentencia en esta alzada.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada en lo que es objeto del recurso, en lo que no se opongan a los que se dirán.

PRIMERO.- En la demanda instauradora del presente litigio, la parte actora D<sup>a</sup> Camino , ejercitaba acción contra su padre, D<sup>o</sup> Florencio , alegando que, habiendo fallecido su madre, D<sup>a</sup> María , el día 12 de julio de 1993, cuando la actora contaba con 6 años de edad, se trasladó a residir con su padre, quién fue nombrado administrador de los bienes de la herencia de la Sra. María en el testamento de 1 de julio de 1993, en el que se le prohibía disponer de la herencia más que en beneficio de la heredera y por necesidad, siendo el único bien "los derechos que pudieran corresponderle por la indemnización o indemnizaciones por un accidente laboral padecido por la causante", sin que, tras alcanzar la mayoría de edad, el hoy demandado haya rendido cuentas de los bienes y derechos que por herencia correspondían a la demandante; suplicando, en consecuencia, que se dictara sentencia por la que se declare que D. Florencio viene obligado a rendirle cuentas de su administración como padre-tutor de los bienes pertenecientes a Dña. Camino , haciéndole pasar por dicha declaración y ordenando que, dentro del plazo prudencial que se estime oportuno - proponiendo la actora el de 20 días desde la sentencia-, rinda las oportunas cuentas de las indemnizaciones correspondientes al fallecimiento de Dña. María ; todo ello con la expresa imposición de costas, atendiendo a la temeridad manifiesta del actor. La parte demandada se opuso invocando la prescripción de la acción ejercitada, así como la aplicación del dinero administrado a favor de su hija, en su beneficio y para la contribución a las cargas familiares.

La sentencia dictada en primera instancia, tras desestimar la excepción de prescripción, estimó la demanda declarando que el demandado viene obligado a dar y rendir cuentas de la administración de los bienes de la demandante, condenándole, en consecuencia, a que en el plazo de un mes procediera a dicha rendición, así como al pago de las costas de este proceso; alzándose contra la misma la representación procesal del demandado, cuya defensa alegó, en esencia, que: en fecha 25 de julio de 2002 la hoy actora abandonó el domicilio paterno por voluntad propia y se trasladó a convivir con una persona con la que mantenía una relación sentimental -cuyo nombre se referencia en el recurso-, interponiendo el hoy apelante denuncia, cuya copia obra en los autos, y comunicando esos hechos al Servicio de Menores del Consell de Mallorca, compareciendo en fecha 1 de agosto de 2002 ante los Servicios de Protección al Menor, del Consell Insular de Mallorca, manifestando que no iba a obligar a la actora a regresar al domicilio familiar, y que accedía a que ingresara en una institución tutelada, así como que le otorgaba la emancipación a partir de que cumpliera los 16 años, procediendo a elevar acta de cesión de guarda y custodia y otorgamiento de emancipación a partir de que la actora cumpliera dicha edad; de estos hechos se deriva que, en aplicación a lo dispuesto en el art. 319 del Código Civil en relación con el 168 y 169 del mismo texto legal, la acción ejercitada de rendición de cuentas se encontraba prescrita por el transcurso del plazo de 3 años desde que se acabó la patria potestad, sin que hasta abril de 2007 se presentase reclamación de rendición de cuentas, que fue instada por la vía de Jurisdicción Voluntaria, procedimiento 456/2007 del Juzgado de 1 a Instancia n° 8 de Palma; por lo que considera la apelante la efectividad de la emancipación, a pesar de no cumplir el requisito de forma que establece el art. 314, al entender que puede ser suplido por la declaración hecha ante el organismo público competente, sanada por vía del art. 319, siempre del Código civil, dado que la actora, a partir del momento en que cumplió los 16 años, se encontraba viviendo independientemente y con el consentimiento del padre; en cuanto a la naturaleza jurídica del plazo de ejercicio de la acción de rendición de cuentas del art. 168, entiende la apelante que "pudiera ser de caducidad, ya que tiene como fundamento objetivo, en la seguridad jurídica y en este caso con un matiz social quizás más acusado, que el instituto de la prescripción, por cuanto afecta al interés público"; finalmente, la apelante solicitó la no imposición de costas por presentar la causa, a su juicio, importantes dudas de hecho de derecho, si bien, terminó solicitando la revocación de la sentencia de instancia con desestimación de la demanda e imposición de costas a la contraparte.

La representación procesal de la parte apelada se opuso a los motivos del recurso haciendo propios los de la sentencia apelada y reiterando y desarrollando los que ya expusiera en primera instancia, a los que procede remitirse en aras a la brevedad.

SEGUNDO.- Entrando ya a resolver los motivos del recurso de apelación, la representación procesal de la parte apelante reitera nuevamente la concurrencia de la excepción de prescripción, sin embargo, en la consideración de la Sala, y tal y como sostiene la sentencia de instancia, la acción de rendición de cuentas del artículo 168 del Código Civil, que establece que al término de la patria potestad podrán los hijos exigir a los padres la rendición de cuentas de la administración que ejercieron sobre sus bienes hasta entonces, prescribe a los tres años, de modo que la actora, nacida el 23 de enero de 1987 (que contaba con 6 años de edad cuando falleció su madre, Dña. María (12 de julio de 1993), la cual la instituyó como heredera universal en testamento abierto otorgado en Palma el día 1 de julio de 1993 ante el Notario D. Gonzalo López-Fando Raynaud, nombrando administrador de los mismos, mientras fuere menor de edad, al padre de ésta, el hoy demandado D. Florencio ), alcanzó la mayoría el día 23 de enero de 2005, aconteciendo que el plazo de tres años que fija el precepto indicado ha de computarse desde el término de la patria potestad, según se refiere en el mismo; por cuanto que, conforme al artículo 169 del Código civil, la patria potestad se acaba: 1º.- por la muerte o la declaración de fallecimiento de los padres o del hijo, 2º.- por la emancipación, 3º.- por la adopción del hijo; de suerte que, no habiéndose otorgado la emancipación en la forma prevista en el artículo 317 del Código civil, se debe concluir que Dº Florencio mantuvo la patria potestad hasta que su hija alcanzó la mayoría de edad en dicho año, interrumpiendo la prescripción la papeleta de conciliación (autos de jurisdicción voluntaria 456/2007, Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Palma), presentada en 2007, antes de que hubieran transcurrido tres años desde la mayoría de edad, e interponiéndose la actual demanda en fecha de registro de entrada 5.11.08. Y, si bien mantiene la demandada-apelante que en este caso se produjo una emancipación de hecho, prevista en el artículo 319 del Código civil, precepto que establece que se reputará, para todos los efectos, como emancipado al hijo mayor de dieciséis años que con el consentimiento de los padres viviere independientemente de éstos, pudiéndose revocar este consentimiento; sin embargo, el propio documento en que se funda tal alegato, otorgado en fecha 1 de agosto de 2002, en que el padre compareció ante los Servicios de Protección al Menor, solicitando la asunción de la guarda del menor, considera la Sala que no cabe interpretarlo -como pretende la apelante- como una concesión de emancipación a partir de que cumpla los 16 años, pues en el mismo se limitó a pedir una medida de protección solo "durante el tiempo estrictamente necesario", remitiéndose al art. 172.2 del Código civil, que igualmente habla de solicitud "durante el tiempo necesario", y en dicha acta se dispuso, en cuanto a la temporalidad, "hasta que cumpla los 16 años y se le otorgue la emancipación", condición ésta que no consta que después se cumpliera con arreglo a las formalidades legales, tal y como dispuso la sentencia de instancia, sin que tal argumento haya sido neutralizado por los motivos del recurso, a saber: la emancipación a que se refiere el artículo 319 del código civil es revocable, a diferencia de la que se otorga en escritura pública o por comparecencia ante el Juez encargado del Registro civil, de modo que en cualquier momento desde que la menor alcanzó los 16 años de edad, y hasta la mayoría de edad, podía volver bajo la guarda de su progenitor, quién lo que pretendía era que ella entrara en un centro de protección y estuviere bajo la guarda de la Administración, alegando que se hallaba en situación de riesgo, situación que sería distinta de la del menor que cuenta con unos medios de vida propios y una cierta madurez que le permita el desarrollo de su vida con independencia. Por otro lado, tal y como denuncia la parte apelada y se dispuso en la sentencia, sin que ello haya sido negado, el hoy demandado cobró la prestación de orfandad, haciéndolo hasta la mayoría de edad de la actora, constituyendo ello un acto propio de asunción de un continuismo en el ejercicio de la patria potestad que contraviene su actual alegato de emancipación de la menor al cumplir los 16 años.

Por todo ello, no cabe entender que se hubiese extinguido la patria potestad a los efectos que prevé el artículo 168 del Código Civil, cuando la demandante cumplió dieciséis años de edad y por el sólo hecho del cumplimiento de dicha edad. De modo que se desestima el recurso de apelación en este punto; todo ello, en el bien entendido de que el actual alegato, no invocado en la contestación a la demanda, de que el plazo del art. 168 del Código Civil es de caducidad, no de prescripción, no puede ser atendido en la medida en que entra en conflicto con la propia dicción legal del precepto, que habla de que el plazo en cuestión "prescribirá a los tres años", cuando pudo haber dicho "caducará a los tres años". Entendiendo la Sala que no cabe realizar la citada interpretación, la cual, además de ser contraria a la referida dicción legal expresa -lo cual es argumento bastante para negarle recorrido-, sería también desechable por el hecho de que, siendo ya la propia prescripción una institución restrictiva del ejercicio de un derecho al someterlo a un plazo, por lo que, tal y como tiene señalado reiteradamente la jurisprudencia, merece interpretación prudente y restrictiva, la tesis de concluir que, pese a que la Ley no lo anuncia así, el plazo es de caducidad y no de prescripción, conllevaría

una notoria contradicción con dicha máxima interpretativa, al ser más restrictiva de derechos en el ejercicio de las acciones la caducidad que la prescripción, por no poder aquella interrumpirse.

TERCERO.- Seguidamente, con relación al fondo del asunto, al no atacarse propiamente por la parte apelante los motivos de la sentencia al respecto, no cabe sino redundar en éstos, por ser la rendición de cuentas un trámite que está obligada a realizar toda persona que tenga encomendada la administración de bienes ajenos, tal y como aparece previsto en el artículo 1.720 del Código civil y sus concordantes. Viniendo al caso recordar, respecto de lo inicialmente apuntado, que en el recurso de apelación el objeto de la pretensión impugnatoria es la revocación de la sentencia dentro de los límites planteados por el recurrente - mediante los que se configura el ámbito que corresponde al principio "tantum devolutum quantum appellatum"-, fuera de los cuales no cabe al Tribunal de apelación pronunciarse sin incurrir en incongruencia. Por ello, el escrito de recurso ha de ir encaminado a obtener dicha revocación mediante la exposición de tesis fundamentadas que delimiten el objeto de la pretensión impugnatoria frente a los contenidos de la sentencia de instancia y permitan a la parte apelada defenderse frente a ella y al Tribunal cumplir con el deber de congruencia.

CUARTO.- Respecto de la pretensión de impugnación de la tasación de costas por concurrir, a juicio de la parte apelante, "importante dudas de hecho o de derecho", no aprecia la Sala tales dudas, y menos aún que las que pudieran existir fueran susceptibles de ser calificadas de importantes, incurriendo nuevamente la apelante en contradicción cuando, por un lado impugna tal pronunciamiento en la sentencia de instancia y, sin embargo, solicita seguidamente en el suplico del recurso la imposición de las costas a la contraparte.

ÚLTIMO.- Al desestimarse el recurso de apelación procede imponer las costas de esta alzada a la parte apelante, y ello en aplicación de los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

VISTOS los preceptos legales citados, concordantes, y demás de general y pertinente aplicación.

## FALLAMOS

QUE DESESTIMANDO EL RECURSO DE APELACION interpuesto por D<sup>o</sup> Florencio , y en su representación el/la Procurador/a de los Tribunales D<sup>o/a</sup> Sara Truyols Álvarez-Novoa, contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Palma en fecha 30 de septiembre de 2009 en los autos de juicio ordinario en ejercicio de acción de rendición de cuentas de administración, seguidos con el número 1364/08, de los que trae causa el presente rollo de apelación, DEBEMOS ACORDAR Y ACORDAMOS:

- 1) CONFIRMAR la sentencia de instancia.
- 2) Imponer las costas del recurso a la parte apelante.

Información sobre los recursos.- Conforme al art. 466.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas optar por interponer el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación, por los motivos respectivamente establecidos en los arts. 469 y 477 de aquella. La Sala 1ª del Tribunal Supremo es el órgano competente para conocer de ambos recursos -si bien respecto del extraordinario infracción procesal sólo lo es con carácter transitorio-. Ambos recursos deberán prepararse mediante escrito presentado ante esta Audiencia Provincial en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación de la sentencia, suscrito por Procurador y autorizado por Letrado legalmente habilitados para actuar ante este Tribunal. Aclaración y subsanación de defectos. Las partes podrán pedir aclaración de la sentencia o la rectificación de errores materiales en el plazo de dos días; y la subsanación de otros defectos u omisiones en que aquella incurriere, en el de cinco días ( arts. 214 y 215 LEC). No obstante lo anterior, podrán utilizar cualquier otro recurso que estimen oportuno. Debiéndose acreditar, en virtud de la disposición adicional 15ª de la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, el justificante de la consignación de depósito para recurrir en la cuenta de esta Sección cuarta de la Audiencia Provincial, nº 0494, debiéndose especificar la clave del tipo de recurso.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Sra. María Pilar Fernández Alonso Sr. Miguel Álvaro Artola Fernández Sra. Juana María Gelabert Ferragut

PUBLICACIÓN



Extendida y firmada que ha sido la anterior resolución por los Ilmos. Srs. Magistrados indicados en el encabezamiento, procédase a su notificación y archivo en la Secretaría del Tribunal, dándosele publicidad en la forma permitida u ordenada por la Constitución y las leyes, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Doy fe.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ